

CARLOS ALTAMIRANO ORREGO

## **CONSIDERACIONES POLITICAS Y ECONOMICAS SOBRE EL GOBIERNO DEL SEÑOR ALESSANDRI**

Lentamente —en el transcurso del acontecer social y político chileno— se han venido operando cambios y transformaciones que, a nuestro entender, son favorables para un desarrollo progresivo del movimiento de izquierda, y en general, para un desenvolvimiento integrado y armónico del proceso histórico nacional.

Desde hace algunos años ya, dentro de los medios y grupos —políticos e intelectuales de izquierda— se ha venido afianzando la idea, de que era urgente y necesario que el gobierno de la república fuera dirigido y orientado por fuerzas políticas —estables y homogéneas— representativas de intereses económicos perfectamente definidas y socialmente individualizables.

Los hechos habían probado que la experiencia centrista se encontraba agotada. Las combinaciones políticas que bajo la égida del Partido Radical gobernaron el país, desde Octubre de 1938, habían ido demostrando —especialmente a partir de 1945— su incapacidad vital para dar al país las soluciones que las circunstancias históricas planteaban de manera cada vez más dramática.

Los gobiernos llamados de centro, al pretender aunar intereses económicos absolutamente antagónicos y representar fuerzas sociales intrínsecamente opuestas, terminaron por esterilizar su acción y sumieron al país en una amarga desilusión que, en mayor o menor medida, vino a anidarse en todos los estratos de la vida social. El desgobierno se había enseñoreado de la república. El proceso que venía de antaño —siguiendo una curva cada vez más pronunciada y ascendente— culminó con estrépito en la administración del señor Ibáñez, donde todos los grupos, sectores, partidos y fuerzas sociales que componen el multitudinario ser colectivo, tuvieron la posibilidad de expresarse a través de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ideas y criterios totalmente disímiles y contradictorios. El precio que Chile pagó por estos años de indefinición y desgobierno fue el estancamiento económico, la miseria y la inflación.

De aquí que bajo este aspecto consideremos como una experiencia importante para la clarificación de la conciencia política del país —para el reagrupamiento lógico de las fuerzas sociales— y, fundamentalmente para terminar con los engaños y mitos de todo orden, que una combinación política estable y homogénea, que representa a un sector social y a un interés económico perfectamente definido, haya asumido el gobierno del país, sin mimetismos ni disfraces de ninguna especie. Porque desde noviembre de 1958 gobierna a Chile la más extrema y pura de la reacción representada políticamente, por los Partidos Conservador, Liberal y Radical; socialmente, por la oligarquía tradicional, la de la tierra y la de la sangre y la nueva plutocracia enriquecida al amparo de 20 años de intervención estatal; económicamente, por todos los que tienen algún poder, por industriales, banqueros, terratenientes, mineros y comerciantes. En síntesis, como lo expresó elo-

cuenta y dramáticamente el Senador Raúl Ampuero: "En la exposición presidencial se paseaban toda suerte de personajes, empresarios, hacendados, banqueros. Todos los hombres de algún poder económico parecen tener un papel de protagonista en el drama de Chile. Hay sólo un gran ausente: El Pueblo."

Hemos colocado al Partido Radical entre los partidos que dan sustento al gobierno actual, plenamente conscientes de que él alberga en su seno grupos muy dispares, tanto por su posición social, como por su situación económica. Pero los hechos es necesario analizarlos objetivamente. En el día de hoy, los elementos dirigentes del Partido Radical —los que componen su directiva— sus parlamentarios —los de mayor preeminencia social y los que de alguna manera tienen influencia política e intelectual en él— están profundamente comprometidos y ligados a los grandes intereses financieros y económicos del país. Salvo rarísimas excepciones, la inmensa mayoría de ellos son los abogados de las compañías extranjeras del cobre y del salitre —los Consejeros de las más importantes sociedades anónimas, industriales y agrícolas—, los Directores de Bancos —los gestores de negocios particulares—, los principales terratenientes en no pocas provincias —los usufructuarios de cargos administrativos básicos— y los Administradores y socios de empresas mineras y comerciales que requieren la protección del Estado. Casi nos atreveríamos a asegurar que ni el Partido Liberal —ni mucho menos el Partido Conservador— tenga entre su equipo directivo personajes tan conspicuos en la vida económica de la Nación. No hay duda. El equipo dirigente del Partido Radical —por su compromiso vital e irrevocable con los sectores plutocráticos de la banca y del comercio, por sus relaciones con las empresas extranjeras y por sus posesiones agrícolas y urbanas— ingresó definitivamente a los que componen la minoría del poder.

El militante radical, anónimo y extraño a este fenómeno de deslizamiento social y económico de sus correligionarios dirigentes, sólo podrá pretender volver a jugar un papel progresista en el desenvolvimiento histórico de Chile en la medida de que sea capaz de realizar la llamada Revolución de los Sargentos. De otra manera, deberá contentarse con ser mero instrumento, corifeo y sirviente de los poderosos en el obscuro drama que se está presentando en esta tierra.

En adelante, no cabrán dudas ni vacilaciones, ni tampoco habrán disculpas. Ha tenido la reacción la oportunidad histórica de recuperar el poder para aplicar, sin trabas ni limitaciones, las soluciones y fórmulas que, según ella, llevan a un país a la prosperidad y al desarrollo económico. Y todo esto dentro de un escenario inmejorable: facultades políticas y administrativas como jamás ningún gobierno las dispuso; precio del cobre estable, sobre 30 centavos la libra; cosechas de trigo, las mejores en los últimos años; estabilidad social absoluta; inundación de dólares, sobre 150 millones en menos de un año; el dominio incontrarrestable de todos los medios publicitarios del país, y por último, una oposición exageradamente generosa. ¿A qué más puede aspirar la reacción?

Y dentro de este marco, la posibilidad política de ejecutar integralmente las ideas y conceptos que según los teóricos reaccionarios conducen a la riqueza de una nación.

Y estas ideas se están aplicando con cinica audacia y con increíble decisión. En verdad los que critican al gobierno por carecer de planes, no han penetrado en la esencia de lo que caracteriza el criterio de un hombre de derecha, que es, entre otras cosas, precisamente, no creer en planes, sino en el milagroso resultado del libre juego de las fuerzas del mercado.

A continuación demostraremos cómo este gobierno, influido especialmente por la personalidad del triministro Vergara, formado ideológicamente en el obscuro mundo de los grandes negocios, ha aplicado los principios económicos que presidieron el desarrollo de los países capitalistas durante los si-

glos XVIII y XIX con absoluto olvido de las normas más elementales de justicia y equidad.

Uno de estos principios dice que son los hombres de empresa —los propietarios de los medios de producción— los que constituyen el elemento dinámico y creador en la economía de un país. En consecuencia, es a este sector al que hay que enriquecer aún más —para que así pueda acrecentar sus ahorros— ahorros que a su vez se transforman en inversiones, las que por su parte, producen nuevas riquezas y dan nuevas oportunidades de trabajo.

Como corolario de este principio está el de que el sector público es parasitario del sector privado, que éste no crea riquezas, y que, en consecuencia, debe reducirse a jugar un papel pasivo y moderador del proceso económico.

El otro criterio básico que caracteriza la manera de pensar de un hombre de derecha, es el de que nosotros no tenemos posibilidades propias de desarrollarnos y que necesitamos imprescindiblemente de la ayuda externa, y concretamente de la de Estados Unidos.

Consecuente con el 1º de los criterios expresados, el gobierno está redistribuyendo las rentas en favor de los grupos económicos que le dieron su representación, en la forma más despiadada e impúdica que puede imaginarse. Para probar lo expuesto, nos remitiremos a los hechos y a lo manifestado por sus propios personeros.

Una de las primeras medidas de este gobierno fue desvalorizar violentamente nuestro signo monetario, elevando el valor del dólar de \$ 850.— a \$ 1.050.— lo que importó un beneficio extraordinario e inesperado para los exportadores en general y especialmente para la Gran Minería del Cobre.

Tan escandalosa e injustificada fue considerada esta alza en el tipo de cambio, que personajes representativos del mundo político y económico de la derecha le dirigieron una carta pública al Director de "El Mercurio" firmada por José García, Gregorio Amunátegui, Bernardo Larraín y Carlos Vial, en la que expresan textualmente: "En cambio, quienes resultan gratamente beneficiados con la caída brusca de nuestra moneda, deben aportar una cuota de sus utilidades extraordinarias al esfuerzo común. **Sería demasiado injusto que aquellos** que realizan sus exportaciones con la actual paridad monetaria, en forma muy satisfactoria, no se desprendan de una parte siquiera de las cuantiosas e inesperadas ganancias que obtendrían con el alza del dólar, a fin de contribuir a aliviar la situación de sectores menos afortunados. **Habrá que adoptar también medidas** en tal sentido, con quienes han formado últimamente stocks extraordinarios de mercaderías y artículos, que les darán pingües utilidades, al ser liquidados a los nuevos niveles de cambios, y con los exportadores que se mantienen ilegalmente sin verificar los retornos de divisas a que están obligados, en espera de la nueva paridad monetaria". Por supuesto que ninguna de las medidas insinuadas se adoptó.

Acercas de las utilidades que el alza de tipo de cambio acarreo a las empresas extranjeras que explotan el cobre, basta remitirse a lo expresado por el Presidente de la República, en su discurso publicado en el Diario "El Mercurio" de 5 de Septiembre pasado, donde reiterando lo dicho en otra declaración anterior manifiesta: "Se mantiene por otra parte en plena vigencia su acuerdo de renunciar en favor del fisco las utilidades extraordinarias que puedan producirse y que provengan de una reducción del costo de producción en moneda corriente expresada en dólares al nuevo tipo de cambio".

En otras palabras, según el propio señor Alessandri, pueden ser de tal cuantía las utilidades de las Cías. Explotadoras de Cobre de la Gran Minería, por concepto de diferencias de cambio, que incluso estarían dispuestas libre y voluntariamente a participar al fisco chileno en estas "utilidades extraordinarias".

Otra de las medidas de este Gobierno, que también ha contado con la ácida crítica de más de alguno de sus propios personeros, ha sido la de donar a los intereses salitreros de Osvaldo de Castro la astronómica cifra de

7 mil millones de pesos. Nunca en la historia de Chile se había votado una ley destinada exclusivamente a favorecer a una persona determinada y en una cantidad semejante.

Pero donde el interés indisimulado del Gobierno de ayudar a los grupos propietarios se pone aún más de manifiesto, es en el análisis de los ingresos presupuestarios en moneda corriente.

Allí podremos verificar cómo las únicas entradas presupuestarias que aumentan en forma notoria, son las provenientes de los impuestos indirectos. Por ejemplo, el rendimiento del impuesto a la compraventa de bienes muebles se eleva de 108.000 millones de pesos que se supone producirá este año, a 166 mil millones de pesos para 1960, o sea, en más de un 50%. Las entradas por impuestos indirectos que gravan la importación de mercaderías, suben de 78 mil millones de pesos a 156 mil millones de pesos, esto es, casi en un 100%. Mientras el total de los impuestos directos se los hace subir de 105 mil millones a 110 mil millones, los indirectos aumentan a 326 mil millones a 490 mil millones. A ello agreguemos, que el ingreso por impuesto global complementario disminuye de 11 mil millones a 5 mil millones.

¿Puede alguien concebir un procedimiento más directo y más regresivo para distribuir el ingreso nacional en favor de los menos y con perjuicio evidente de los más?

Debemos dejar constancia que todas las misiones técnicas que a lo largo de los años han venido a darnos consejos económicos —incluso la Klein-Saks— han concordado en la alta regresividad que presenta nuestro sistema de ingresos presupuestarios. El actual gobierno ha exagerado esta regresividad a límites incalificables, especialmente si se tiene en cuenta su política de precios y de sueldos y salarios. El esquema no puede ser más simple —para el sector capitalista —dinamo de la acción— más utilidad y menos impuestos; para el sector asalariado —elemento despreciable de la economía— más impuestos y menos remuneraciones.

Pero no es ésta toda la historia.

El sector agrícola de hacendados y terratenientes, que apoyó la postulación presidencial del señor Alessandri, también recibió su premio consistente en una rebaja sustancial de las contribuciones de bienes raíces para el año en curso. Y para el próximo año, los ingresos por contribuciones de bienes raíces disminuirán según los cálculos presupuestarios, en más de dos mil millones de pesos, en valores absolutos.

Veamos por otra parte, lo que ha obtenido el capitalismo bancario en este breve periodo de restauración reaccionaria: exenciones tributarias de diverso orden establecidas en la Ley 13.305 —suspensión de los topes de colocación— utilidades extraordinarias originadas en la altísima tasa de interés que cobran por sus préstamos y beneficios de diferente naturaleza, derivados de la emisión de bonos y pagarés dólares hechos de acuerdo con las Leyes 13.305 y 4.987.

Pero aún la historia sigue y suma.

Con el objeto de atraer dólares del exterior, se concedió por la Ley 13.305 todos los beneficios inimaginables a los adquirentes o tenedores de obligaciones dólares emitidos en conformidad a dicha Ley. Ello ha significado una inversión superior a los 35 millones de dólares —esto es, sobre 36 mil millones de pesos en moneda corriente— valores que producen a sus dueños alrededor del 20% anual (15% paga el arrendatario y 5% el Estado). En otras palabras, los prestamistas obtendrán en sólo un año, una utilidad superior a los 7.200 millones de pesos, liberada totalmente de impuesto. Y a esto habría que agregar las rentas que han obtenido, especialmente los bancos y algunas empresas particulares que han tenido el privilegio de suscribir sobre 35.000.000.— de dólares en pagarés de la Ley 4.987, pagarés que a su vez son arrendados a los importadores a un subido interés. Sociedades, como Cemento Melón, han invertido centenares de millones de pesos en estos pagarés dólares, para a su vez, darlos en arrendamiento a terceros a un interés superior al 20%. Han

dejado de utilizar los capitales en la explotación de rubros legítimos del fin social, para destinarlos a la noble y lucrativa actividad de la usura.

Pero no es esta tampoco —la de producir tan altos intereses— la única ventaja de las obligaciones dólara de la Ley N° 13.305. La principal de ellas reside en que el adquirente de una de estas obligaciones queda totalmente liberado de dar cuenta del origen de sus capitales, tanto a Impuestos Internos, como a la Comisión de Cambios Internacionales. Vale decir, se le concedió al sector capitalista la amnistia más amplia que pueda imaginarse, para todos los que, carentes del más elemental sentido patriótico, llevaron sus capitales fuera del país o los ocultaron mañosamente en el interior. En otras partes se sigue juicio público a los que envían sus capitales al exterior. En Chile —este gobierno— no sólo los premia, tendiendo sobre ellos el manto del olvido, sino que a mayor abundamiento, les otorga toda clase de privilegios tributarios.

Pero tampoco concluye aquí esta larga cadena de beneficios y ventajas concedidos a los sectores plutocráticos del país.

Es necesario haber hecho un detenido estudio de la Ley N° 13.305 para saber hasta qué punto se han otorgado liberalidades económicas a los sectores de la producción y del comercio. Basta saber que sólo por capítulo de revalorizaciones, el sector capitalista pagó en 1958, cinco mil millones de pesos, en 1959, mil setecientos millones de pesos y, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley N° 13.305, deberá pagar en 1960 sólo 40 millones de pesos. Por este sólo título el sector industrial se ahorra alrededor de 1.700 millones de pesos.

Y para coronar esta larga procesión, donde sólo se ha hecho un recuento de una parte de todas las principales ventajas económicas que ha obtenido el grupo de los empresarios en este breve interregno de restauración reaccionaria, está la más cruel e impúdica de las teorías económicas —elaboradas y difundidas— expofeso para despojar inhumanamente a los sectores mayoritarios de la población del sustento mínimo diario que se requiere para vivir.

¡Sólo el tiempo dará las perspectivas suficientes para comprender hasta qué punto esta teoría es injusta, desde el punto de vista moral y falsa en su sentido económico!

Mientras los sueldos y salarios —esto es, el precio de una vida— se congela por ley, el precio de las mercaderías se deja al libre arbitrio del lucro.

Si el gobierno tuviera mayor sentido de equidad ordenaría cambiar el nombre al llamado "Índice del costo de la vida". Porque aceptar que ese índice, que es el que como su nombre lo indica —el **costo de una vida**— no debe reajustarse en porcentaje igual a las fluctuaciones que él ha experimentado, equivale a sostener que el hombre que vende su trabajo por un sueldo o por un salario no tiene derecho a la vida.

Algún día se comentará como algo increíble el hecho de que haya existido una época donde los dueños y poseedores de la riqueza reajustaban la remuneración de sus dependientes en porcentaje inferior a lo que ellos mismos —de acuerdo con sus estadísticas— consideraban el costo de una vida. Y este despojo cínico y brutal lo hacían, según ellos, para favorecer a los propios despojados.

No hay la menor duda. Nunca jamás, en ningún país del mundo se ha concebido y realizado un plan más frío e implacable para arrebatarle al pueblo —al hombre anónimo y modesto— el pequeño y minúsculo sustento de cada día, a través de todo un sistema de reajuste de sueldos y salarios por debajo del costo de la vida, desvalorización monetaria, impuestos indirectos, exenciones tributarias, liberalidades económicas, inflación, etc.

Se han utilizado todos los recursos y mecanismos que existen, económicos y financieros, para agregar más agua al molino de los ricos y para restarle y disminuirle la poca que caía en el molino de los pobres. No ha ha-

bido ni una sola iniciativa —ni siquiera una— destinada a aliviar la dramática condición de vida del pueblo chileno.

¡Y pensar que toda esta gigantesca máquina destinada a redistribuir las rentas en favor de los grupos propietarios se ha hecho de acuerdo con la teoría de que son los ricos los que pueden impulsar la actividad económica de un país y, en consecuencia, no debe restárseles poder de compra, para que así puedan —generosa e inteligentemente— derramar sus excedentes en nuevas actividades creadoras de riqueza!

Y a este concepto —tan caro, no sólo por desgracia para los sectores empresarios o directamente beneficiados—, sino que también para más de algún incauto e inocente, agregan el axioma de la incapacidad vital del país para desarrollar por sí mismo las inmensas potencialidades materiales, ciegas y oscuras que descansan en su subsuelo y la infinita energía creadora que yace adormecida en lo hondo del espíritu de cada hombre y de cada mujer del pueblo de Chile.

Y así, como en aras del otro concepto se empobrece y se jibariza el pueblo en sus posibilidades materiales y en sus aspiraciones espirituales —en aras de este— se pretende entregar el petróleo a los consorcios internacionales, se le regalan utilidades extraordinarias a las empresas extranjeras del cobre y del salitre, se suscriben tratos preferenciales con la Cia. Eléctrica, se concede vigencia inconstitucional a las normas que establece el Fondo Monetario Internacional en materia financiera y económica y se premia al capital prestamista foráneo con intereses usurarios.

Pero estos principios básicos que conforman la ideología del equipo gobernante, se ven adicionados por otros no menos regresivos y perniciosos. Entre éstos ya hemos mencionado el del carácter parasitario que según ellos tiene el sector público. También, en holocausto leal y sincero a él, se está desmantelando la acción estatal en sus diversas esferas de acción. La Corfo —disminuida a su mínima expresión— la inversión fiscal —violentamente reducida según lo prueba con cifras y cálculos irrefutables el Senador Vial— las empresas estatales mutiladas en sus posibilidades— de la cual difícilmente escapó la Línea Aérea Nacional y, tal vez, con no poco esfuerzo logre hacerlo la Industria Azucarera Nacional y la Empresa Nacional de Petróleos. El Instituto de Seguros del Estado, el Departamento Comercial del Banco del Estado, el Instituto Nacional de Comercio —todos— en mayor o menor medida, caen o mueren bajo la razzia homicida de la restauración plena de principios económicos y políticos totalmente anacrónicos e incapaces de despertar y movilizar las energías nacionales en una gran empresa de superación colectiva.

Y toda esta mentalidad liberal y reaccionaria que se ha adueñado del gobierno de la república se pretende entronizarla a través del establecimiento de una máquina administrativa, militar y educacional, como tal vez no lo ha hecho ningún otro régimen en Chile. Esta máquina administrativa se esta armando bajo el patrocinio de lo expresado por el propio Presidente de la República, en su discurso de 4 de Septiembre pasado, quien legitimó el derecho que asiste al gobierno, de "cambiar funcionarios incapaces y deshonesto o **cuya ideología es incompatible con la línea de gobierno**".

Los hechos expresados demuestran hasta qué punto estaban equivocados los que creyeron en la campaña demagógica y falsa de la independencia del primer mandatario. En política no existe la independencia. Esta es sólo una careta que sirve para ocultar otras intenciones. El hecho de pertenecer o no a un Partido político no le da a un hombre el carácter de independiente. Porque lo que importa e interesa fundamentalmente es la independencia frente a los intereses económicos en juego y a las posiciones ideológicas y doctrinarias que agitan, dividen y conmueven el mundo de hoy. Y lógicamente frente a estos hechos, nadie puede ser independiente, de no ser un solitario extraño a nuestro tiempo o un retrasado mental. Decimos y reiteramos que no tiene mayor importancia que el Primer Mandatario sea semi-

independiente para colocar, por ejemplo, en la Dirección de Correos a un liberal o un radical; pero en cambio, si la tiene, que no tenga un criterio o un juicio formado frente a problemas tales como: la Reforma Agraria; el de la participación de las Cias. extranjeras en la economía nacional; el de si el elemento dinámico en las economías poco desarrolladas es el sector privado o el sector público; o el de si la inflación la provocan los reajustes de sueldos y salarios o el sistema estructural retrasado y feudal que caracteriza nuestras relaciones económicas. Y frente a estas alternativas, el señor Alessandri tiene juicios perfectamente formados y categóricos, que lo identifican plenamente con los sectores económicos y sociales que lo elevaron a la primera magistratura.

Es por esto que consideramos aleccionador para la clarificación de la conciencia política del país, que la reacción —comandada por su grupo de empresarios— haya asumido personalmente la dirección del Estado.

Hasta la fecha, orientaban y dirigían los negocios públicos a través de la influencia que su mayor preeminencia social le concedía ante los grupos arribistas y desclasados de la incipiente clase media chilena y de algunos elementos oportunistas y traidores del proletariado. Pero ante la faz del país —ella no aparecía— los demás eran los responsables —eran sectores sociales que carentes de principios, destituidos de conocimientos y desprovistos de ideales, servían incondicionalmente sus intereses e incluso aceptaban pasar por incapaces y deshonestos, con tal de ser admitidos en la dirección de los negocios privados o en la intimidad social de un salón francés.

El caso más evidente lo tenemos en el Partido Radical. La derecha ha sostenido hasta la saciedad que el país sufrió un grave retroceso económico, moral y político con la ascensión de dicho Partido al Gobierno, el año 1938. Sin embargo, son estos mismos radicales motejados de deshonestos —incapaces e ignorantes— los que olvidando todas las injurias e insultos de ayer, colaboran y rinden pleitesía a los amos de hoy.

No más eufemismos, ni más engaños. Por fin se han enfrentado claramente dos intereses y dos concepciones de vida.

Por un lado está la Derecha —la reacción— el Partido Conservador, Liberal y Radical, la plutocracia nacional, los intereses extranjeros, los terratenientes y el lumpen de escribanos, plumarios, gestores, demagogos e intelectuales pagados para que en todas las esferas de la acción social rindan acción de gracia a los dioses que constituyen hoy la minoría del dinero y del poder.

Por el otro lado está el pueblo —el pueblo puro y simple— sin dinero, sin radio, sin tierras, sin minas, sin empresas extranjeras, sin monopolio, el ser anónimo y multitudinario del pueblo, del que tiene necesidad de arrendar su vida para vivir.

De un lado, los que creen que los ricos son el elemento motor de un país, que el dinero extranjero tiene por sí solo la virtud de despertar y movilizar las riquezas nacionales, que hay que conservar todo como está, no mover nada, cuanto más ordenar un poco, que es necesario dejar actuar libremente a las fuerzas espontáneas y naturales del mercado, de la ley de la oferta y la demanda y la de la libre competencia.

Del otro lado, los que creen que son los pueblos los que hacen la historia, como la están haciendo China, Rusia, Bolivia, Cuba o Yugoslavia; que el dinero extranjero es sólo un elemento accesorio en el desarrollo económico de un país; que lo principal es la fe y la decisión de un pueblo de labrarse su propio destino, con esfuerzo y con trabajo —si no hay empresa colectiva no hay progreso nacional— que es necesario provocar profundas transformaciones en el sistema de tenencia de la tierra, en los porcentajes de participación del capital extranjero en la economía nacional, en el régimen tributario, en el sistema previsional, en la estructura monopólica

de la producción, en los hábitos y costumbres de la gente, especialmente en cuanto se refiere al gasto y al ahorro y en la planificación racional e inteligente de los recursos disponibles.

Estos son los intereses en juego y éstas son las ideas y conceptos en pugna. Lo demás —la independencia, la honradez, el patriotismo, la moralidad, la capacidad— no son atributos privativos de nadie y cuando más caretas destinadas a confundir a tontos e ignorantes.

*“La Derecha no está dispuesta a ningún sacrificio. Los sectores económicos que representan los partidos tradicionales son incapaces de salvar a Chile. Existe en ellos algo así como una descalcificación del alma, una suerte de raquitismo irremediable del espíritu. En un esfuerzo postrero, se asilan en valores tradicionales carentes hoy de vigencia efectiva para animar la vida de los pueblos.*

*Hace poco tiempo tuvimos aquí una Conferencia de Cancilleres. Vinieron hombres de Cuba, protagonistas de aquella heroica locura que trajo la derrota de Batista. Vinieron hombres de Bolivia, que se atreven a construir una nación, comenzando por reivindicar valerosamente al indio, heredero de los incas. Malraux acaba de decir en Europa que en el Brasil está despertando un coloso. México, Venezuela exploran sus territorios y movilizan sus recursos humanos para emerger más prósperos cada día. Aun en Nicaragua, en Paraguay, en Santo Domingo, ahogados por la dictadura, hay fuerzas vitales del pueblo que luchan con denuedo, con fe, con coraje. Aquí, en Chile, nuestros estadistas, como solteronas crepusculares, se conforman con ofrecer su vieja casa, recorrer los cortinajes, sacar las fundas de los muebles y enseñar sus antiguas virtudes. Virtudes dudosas, porque cuando la decrepitud y la pobreza se abaten sobre una nación, ni siquiera tiene tentaciones para probar la fortaleza de su virtud. Un país ordenado, pobre, tradicional y sin alma, eso es lo que enseñamos al extranjero; en eso estamos convirtiendo a nuestra patria”.*

(Senador Raúl Ampuero, en el Senado de la República, enjuiciando al Gobierno del Sr. Alessandri. Sesión del 16 de Septiembre de 1959).